

Aspectos praxeológicos de las leyes de competencia

INTRODUCCIÓN

Las leyes de competencia han sido un tema de interés en el ámbito jurídico y económico, especialmente desde que se comenzó a reflexionar sobre el modo de decretar normas y sus alcances en el siglo XVIII. A lo largo del tiempo, se ha planteado la necesidad de regular los procesos sociales y económicos para mantener la paz social, bajo la premisa de que una autoridad debe intervenir en estos procesos. Sin embargo, es fundamental comprender la relación entre la economía y la conducta humana para analizar las consecuencias de la intervención estatal en el mercado.

La economía, como ciencia social, se ocupa de entender las motivaciones que impulsan el comportamiento humano y cómo este comportamiento se traduce en acciones con consecuencias. La acción humana es una reacción a incentivos y motivaciones, y este entendimiento es importante para descifrar cómo las políticas legislativas impactan en la eficiencia del mercado y la libertad individual. El método económico puede simplificar problemas jurídicos y permitir una evaluación más clara de las consecuencias de las acciones legislativas.

Desde la perspectiva praxeológica, que se basa en el estudio de la acción humana, se considera que las interaccio-

nes voluntarias y cooperativas entre individuos son suficientes para regular las relaciones económicas sin necesidad de una autoridad central que intervenga en cada aspecto de la vida económica. La intervención estatal, a menudo justificada en aras de proteger la competencia y prevenir monopolios, puede llevar a una restricción de la libertad individual y de la creatividad en la resolución de problemas sociales y económicos.

Por tanto, resulta necesario analizar hasta qué punto la legislación en materia de competencia es efectiva o si, por el contrario, interfiere en el desarrollo natural de las leyes económicas. Este análisis no solo implica una revisión de los aspectos legales, sino también una comprensión profunda de la naturaleza de la acción humana y del papel que juega la libertad en el crecimiento y desarrollo económico.

MÉTODO

El análisis se llevó a cabo a través de un enfoque praxeológico, centrado en la acción humana como eje fundamental para comprender las implicaciones de las leyes

Gabriela Cabrera Polanco, licenciada en derecho (2020), tiene una Maestría en Economía de Mercado por la Universidad de Occidente (2024) y actualmente realiza estudios doctorales en la misma universidad.

de competencia. Se empleó un método cualitativo que integró una revisión exhaustiva de la literatura económica, especialmente de la Escuela Austriaca de Economía, para identificar cómo las regulaciones legales impactaron en las decisiones y comportamientos de los agentes económicos.

Se realizó un estudio comparativo de las diferentes normativas de competencia, examinando sus efectos en mercados con distintas estructuras y niveles de intervención estatal. Este estudio incluyó un análisis de la legislación que busca prevenir prácticas anticompetitivas y se evaluaron sus consecuencias en términos de eficiencia económica, innovación y libertad individual.

El método también contempló el análisis de principios económicos como las ventajas comparativas, la utilidad marginal y los costos de oportunidad, para evaluar si las regulaciones promovieron o inhibieron el desarrollo espontáneo del mercado. La revisión de textos clave de autores como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Murray Rothbard permitió contextualizar las leyes de competencia en un marco teórico que privilegia la acción voluntaria y la interacción social como motores del desarrollo económico.

RESULTADOS

El derecho ha sido visto tradicionalmente como un conjunto de normas destinadas a organizar la coexistencia pacífica de las personas, a las cuales los individuos deben ajustar su conducta, según refiere Rojas. (2018, p.11) Desde el siglo XVIII en la filosofía del derecho se ha estudiado como tema central el modo de decretar dichas normas, sus alcances y límites. No obstante, se ha propagado la idea de que,

para mantener la paz social, el derecho y la función legislativa de los gobiernos de turno, deben tener un vínculo inalterable, aumentando cada vez más el planteamiento de que todo proceso social y económico ha de ser regulado por alguna autoridad.

Es necesario comprender que el concepto de economía como ciencia social, se define y vincula a la conducta de los seres humanos. En virtud de que la economía lo que trata de entender son las acciones del hombre como tal, así como cuáles son las motivaciones para elegir actuar de ese modo, su fin es tratar de sacar conclusiones sobre las consecuencias de la acción de la persona. Entonces, el tener en cuenta que la conducta humana es una reacción ante determinados incentivos o motivaciones viabiliza la comprensión de las consecuencias de ciertas circunstancias o situaciones. Es decir, la motivación seduce al hombre hacia la acción y esta implica una consecuencia que termina afectando a diversas personas, muchas de las cuales no se conocen entre sí.

Por lo tanto, el uso del método económico para entender las situaciones jurídicas que se desarrollan en las relaciones humanas tiende a simplificar el problema, descifrando la manera de resolverlo y de comprender las consecuencias. Pero, para ello debe intuirse que, a través de las acciones cooperativas y la interacción voluntaria, cada individuo se tiene que hacer responsable de las consecuencias de sus acciones, por lo que no hay necesidad de que una autoridad central tenga que regular cada una de las actividades o participación de los individuos en los intercambios que realizan para conseguir los propósitos que se fijan.

Al respecto, Ludwig von Mises (2004)

expone:

... el actuar implica y presupone la categoría de causalidad ... la causalidad es una categoría de la acción ... el hombre no puede actuar cuando no percibe relaciones de causalidad. En efecto, aun cuando conozca la relación causal, si no puede influir en la causa, el individuo tampoco puede actuar. El análisis de la causalidad siempre consistió en preguntarse el sujeto: ¿Dónde y cómo debo intervenir para desviar el curso que los acontecimientos adoptarían sin esa mi interferencia capaz de impulsarlos hacia metas que satisfacen mejor mis deseos? ... Busca la “ley”, precisamente porque desea intervenir (pp. 27, 28).

Además de comprender que la economía, desde la praxeología, es el estudio de la acción humana y que el hombre actúa buscando alcanzar determinados fines, se hace necesario abordar el tema del uso de los medios para interferir en los fines individuales, es decir, mediante la regulación de determinadas conductas a través de la legislación. En tanto no se comprende que la ciencia económica cuenta con leyes propias que no se deben alterar por medio de imposiciones exigidas por la gobernanza, se obstruye la capacidad de los individuos de resolver fenómenos sociales complejos desde las acciones voluntarias. Esto, sin necesidad de una coacción externa cuyo resultado puede consistir en la coartación de la creatividad individual para resolver sus problemas de escasez o para alcanzar sus fines propuestos.

En ese sentido, por medio de la legislación no puede pretenderse orientar a las personas a actuar de determinada manera para lograr sus fines por cuanto y en tanto la autoridad central no tiene idea de cuáles son los fines de cada individuo, ni tampoco conoce los medios que tiene al

alcance para lograrlos. Este tema ha sido ampliamente discutido por Hayek (2006) donde aborda el tema del constructivismo racionalista como un pensamiento actual que favorece las reglas impuestas desde la autoridad central – en otras palabras, intervencionismo que conduce hacia un sistema de control coartando la libertad de los individuos.

Por otro lado, se ha difundido el concepto de que la “*seguridad jurídica*” existe única y exclusivamente cuando hay una norma emanada desde el órgano legislativo que respalde o regule la actividad, no quedando claro que, como lo expone Rojas (2018, p. 160), “los conflictos pueden ser resueltos aplicando normas que se deben deducir de la razón y las costumbres”. Es decir, la razón y las costumbres implican que el actuar de los individuos en sociedad lo realizan de modo racional, no instintivo. No se pretende decir que no debe haber normas emanadas del Legislativo, sino que, para que exista paz entre los habitantes de un país, se necesita que la legislación sea lo más amplia posible y como requisito primordial: que sean aplicadas para todos por igual sin que ninguno quede excluido, ni porque tenga alguna condición especial.

Por el contrario, cuando se busca esa condición especial para que alguna norma no sea aplicada a determinada persona, se crea una incompatibilidad entre la legislación, el derecho y la justicia. Surge esa condición especial cuando se pretende obtener un privilegio, una prebenda, un trato especial en el ámbito económico, con el fin de proteger o favorecer a determinado productor en desmedro de otros productores y del consumidor. Así es como hace varios siglos nace la doctrina que se ha llamado “*mercantilismo*” y, desde el siglo XVIII Adam Smith manifiesta: “el privilegio exclusivo de un co-

mercante restringe necesariamente la competencia en el lugar donde se establece, a quienes son ajenos a ese comercio... la intención es restringir la competencia a un número mucho menor que, de lo contrario, podría estar dispuesto a participar en el comercio” (Smith, 2007, p. 107).

En ese sentido, Cole (2004) opina que en la actualidad sobreviven remanentes de las políticas mercantilistas que se siguen defendiendo y justificando con los mismos obsoletos argumentos. En aquel entonces, el mercantilismo favorecía la extensa regulación de la actividad económica con vistas a la promoción de ciertos intereses nacionales, siendo toda política económica evaluada en función de su efecto sobre la provisión nacional de metales preciosos, en virtud que la masa monetaria de entonces consistía principalmente en dinero metálico. Por tanto, manifiesta Cole:

Smith criticó las doctrinas y políticas mercantilistas advirtiendo que la teoría y la práctica eran incompatibles con su propio modelo de crecimiento que se basaba en el funcionamiento del mercado libre, limitando la extensión del mercado y por tanto el grado de división del trabajo que es la fuente última del crecimiento económico (Cole, 2004, p. 80)

Precisamente el funcionamiento del mercado libre, permitiendo que las leyes económicas se desarrollen de manera autónoma hace que el mercado pueda crecer y generar progreso para todos los habitantes como consecuencia del impulso que cada individuo coordina con los demás mediante la cooperación social, entendiendo que cada cual desarrolla habilidades particulares que les permiten participar en la división del trabajo. De esa participación individual se desprende el desarrollo de una sociedad libre, razón por la cual se debe analizar desde la pers-

pectiva individualista las tendencias conductuales que encaminan a desarrollar la economía de una sociedad.

Una de las exposiciones esenciales de la Escuela Austriaca de Economía reside en el individualismo metodológico. Esto conduce a comprender el desarrollo de la teoría económica desde el estudio de la acción de las personas individualmente consideradas, y no como entes colectivos. Para ello, se precisa comprender las leyes económicas naturales, por ejemplo: las preferencias temporales, las ventajas comparativas, los costos de oportunidad y la utilidad marginal decreciente. Estas se consuman de manera espontánea y sufren modificaciones involuntarias cuando son alteradas desde un ente externo.

Al entender este principio del individualismo metodológico, se logra avanzar en la investigación de la ciencia social que nos ocupa. Por lo tanto, es imprescindible mencionar el siguiente supuesto general: la libertad del individuo contribuye a su desarrollo, tanto individual como al bienestar de la sociedad como un todo. Keckeissen (2014, p. 21), citando a Marshall, afirma que por medio de la formulación de leyes económicas nos acercamos gradualmente a aquellas unidades fundamentales que son llamadas leyes de la naturaleza. Y continúa Keckeissen citando a Schumpeter: “... el ideal de ley natural incorpora el descubrimiento de que los datos de una situación social determinan una secuencia de eventos, un proceso o un estado lógicamente coherente, o lo harían si se les permitiera actuar sin perturbaciones.”

Para entender los fenómenos sociales, primero se debe de comprender que el ser humano es un ser eminentemente social que no puede sobrevivir solo, teniendo que estar expuesto a determinado ambien-

te que influye en sus decisiones personales. La percepción del individualista liberal John Locke de la ley natural consistía en lo que dicta el sentido común para proteger los derechos básicos del individuo. Para que funcione la vida en sociedad según Locke, hace falta que el hombre sea un cooperador condicional y que, a través de la razón se instituya una sanción al depredador. Para él, el estado de libertad y la razón natural enseñan a todos los hombres que, siendo todos iguales e independientes, nadie debe perjudicar a otro en su vida, en su salud, en su libertad y en su bien.

Y, aunque el hombre estaba en buenas condiciones en un estado natural, prefirió el estado de sociedad para estar mejor, a pesar de exponerse a ciertos inconvenientes que podían agravarse. Según Locke, gracias al consentimiento de cierto número de hombres *libres* se inició un gobierno *legítimo* que se encargaría de “proteger los derechos básicos del individuo” (Amurrio, 2009, p. 175-182). En ese sentido, lo que Locke analiza sobre la *legitimidad* de un gobierno es que un gobierno absoluto no puede ser legítimo y defiende un Estado liberal cuyo poder no sea irresistible sino, por el contrario, que el poder sirva para superar las inseguridades y desequilibrios propios del estado de naturaleza y, de hecho, logre sintetizar la facultad del pueblo a resistirse de modo legítimo contra quien posee el poder.

Estos conceptos de Locke son parte del fundamento sobre el cual se erige el pensamiento liberal, dado que parten de la idea de la igualdad de los seres humanos como seres racionales y libres buscando que se asegure el ejercicio de la libertad por medio de instituir jurídicamente la libertad *igual para todos*.

Por su parte, Rojas (2018, pp. 25-88)

abarca el tema de los fenómenos sociales vistos desde el individualismo metodológico. Rojas indica que los estudiosos de las ciencias sociales que analizaron la naturaleza humana llegaron a reconocer que cada persona goza de valores, virtudes, sentimientos, pasiones y defectos que no siempre coinciden y que, a menudo se contradicen. Rojas cita a Ezequiel Gallo: “Esto permitió que dedujeran determinados presupuestos con respecto al comportamiento del hombre: a) actúa siempre buscando una satisfacción personal, un interés propio; b) posee limitaciones cognitivas; c) enfrenta un mundo con recursos escasos”.

Asimismo, la Escuela Austriaca de Economía se distingue de las demás escuelas de pensamiento económico por el desarrollo de la Praxeología, que es una ciencia teórica y sistemática cuyo objeto es el estudio de la acción humana. A lo cual, Mises refiere que:

... en el campo de la acción humana no es posible recurrir a ningún experimento de laboratorio... La experiencia histórica como experiencia de fenómenos complejos no nos proporciona hechos en el sentido en que las ciencias naturales emplean este término para significar sucesos aislados comprobados de modo experimental ... Cuando se trata de explicar algo, la mente humana no duda en inventar *ad hoc* las más imaginarias teorías carentes de toda justificación lógica (Mises, 2004, pp. 37-44).

Por eso se considera adecuado realizar un estudio desde el punto de vista de las implicaciones formales de la descripción del concepto de acción. En otras palabras, la Praxeología se basa en el axioma de que el ser humano actúa, eligiendo ciertos medios escasos, con la pretensión de alcanzar determinados fines que considera importantes para él. La praxeología pre-

tende ser una ciencia objetiva, cuyas enseñanzas resultan válidas para todo tipo de actuación, independiente de las circunstancias ambientales, accidentales e individuales. Su objeto de estudio son los medios, no los fines.

Por tanto, los puntos centrales de la praxeología de Mises pueden ser útiles para entender los fenómenos del proceso de intercambio que se realiza en el mercado, ya que analiza las implicaciones formales de la acción humana, que es la esencia de lo económico. Aunque Mises insiste en que “el punto de partida de la praxeología no consiste en seleccionar ciertos axiomas ni en preferir cierto método de investigación, sino en reflexionar sobre la esencia de la acción” (p. 48), consideramos que, para efectos del presente estudio, podría ser útil apartar cinco principios que Mises desarrolla en el tema de la acción humana: se procura mejorar el estado actual; toda acción implica un acto de valoración, de acuerdo con las preferencias temporales sacrificando algo a cambio; los recursos con que se cuenta son escasos; los objetivos que procura alcanzar son ilimitados; se asumen riesgos por la eventualidad de no poder lograr lo que se anhela con los medios que se aplican y hay factores imprevisibles que generan incertidumbre.

Además, Aristóteles y Platón, en su búsqueda de una ética racional llegaron a la conclusión de que el estado era la encarnación del organismo moral de la humanidad. Rothbard (2015) refiere a “el hecho de que el *hombre* debería hacer esto y lo otro, se tradujo rápidamente en que *el Estado* debería hacer esto y lo otro. Pero en ningún momento se examinó detalladamente la naturaleza del propio Estado” (p. 286).

En tanto el hombre necesita agruparse

para lograr un mejor bienestar de manera colectiva que individualmente, será menester organizar la comunidad política con el fin de no vivir aislados. En fin, el hombre es sociable por naturaleza, como lo puso Aristóteles: “el hombre es un animal político” (Amurrio, 2009, p. 41). El problema entonces radica en considerar tanto la naturaleza social del hombre, su relación con el gobierno y el lado económico y político de este.

Mises afirma que el sistema constitucional que comenzó a finales del siglo XVIII y principios del XIX ha desilusionado a la humanidad y expresa que la mayoría de las personas no toman en cuenta que hay un lado económico y uno político del problema, porque no consideran que hay conexión entre ambas. Al respecto, manifiesta Mises (2007):

... lo que se denomina deterioro de la libertad, del gobierno constitucional y de las instituciones representativas, es la consecuencia del cambio radical en las ideas económicas y políticas. Los acontecimientos políticos son la consecuencia inevitable del cambio en las políticas económicas (p. 112).

Estos cambios en las políticas económicas van encaminados a cumplir con la obligación del gobierno como responsable de la promoción del bien común. Hayek (2001) hace una definición del concepto y se refiere al bien común de la siguiente manera:

El concepto de bien común o de bien público de una sociedad libre jamás puede definirse como una suma de resultados particulares conocidos y que hay que perseguir, sino sólo como un *orden abstracto* que en su conjunto no está orientado a ningún fin particular concreto, sino que simplemente da a cualquier miembro elegido casualmente la mejor oportunidad de

usar con éxito su propio conocimiento para sus propios fines (p. 28).

Por tanto, analizar el problema del deterioro de la libertad, tanto desde el lado económico como el político, requiere observar empíricamente a qué se refiere el deterioro de la libertad por medio de la legislación que no permite ni favorece la consecución de muchos de los objetivos individuales de los agentes económicos. Muchas veces, estos fines pueden ser diferentes, divergentes o incluso contrapuestos unos a otros, y, en la búsqueda de su realización, las acciones pueden ser objeto de producir una falta señalada en la legislación. Cuando es así, las acciones llevadas a cabo por cada agente en la persecución de sus fines particulares tienen que ser repensadas, mermando la fuerza de la acción humana que gravita entre la reciprocidad y la búsqueda de ventajas mutuas.

Por el contrario, al no tener obstáculos a su libertad de acción en cuanto al uso, disposición y aprovechamiento de lo que el agente considera como su derecho de propiedad, emerge este orden espontáneo del mercado, que Hayek denomina *catalaxia*. Esto se refiere a que cada individuo tiene la libertad y la posibilidad de usar su propio conocimiento y habilidades, aprovechando lo que ha producido o intercambiado para alcanzar sus fines. Esta acción llevada a cabo en plena libertad puede lograr que los enemigos se conviertan en amigos. Y el desenlace no favorece únicamente a estos dos personajes que generaron un amigo, sino a todo un conglomerado de personas que, sin conocerse han cooperado con ese intercambio mediante la producción o el consumo.

Entonces, las funciones coactivas del gobierno deben limitarse estrictamente a

la aplicación de normas jurídicas generales, reglas de mera conducta universalmente aplicables. Uno de los problemas del gobierno es que, bajo la influencia del positivismo jurídico y de la doctrina democrática, se acepta únicamente el criterio de justicia que emana de la voluntad del legislador.

Por el contrario, la acción humana implica actuar explorando las posibilidades de mejorar la condición actual; aunque no se está exento de cometer errores. Lo que es cierto, es que nadie actúa para empeorar. Esa es la esencia de la naturaleza humana, la búsqueda de una mejor condición de vida. En esto, los gobernantes no tienen por dónde incluirse ni inmiscuirse, nada más que en velar por que nadie perturbe los planes de los demás, que no dañen la propiedad y la vida de los demás, y que los hagan responsables por las consecuencias en que sus acciones puedan repercutir.

Es preciso puntualizar con base en la praxeología, que el hombre actúa para mejorar su condición actual. Ese es el mismo modo en que opera la motivación de beneficios que busca la estructura de una sociedad capitalista (Mises, 2005, p. 35). Sin embargo, a pesar del éxito que ha tenido el capitalismo en elevar el nivel de bienestar material de todas las personas, se ha presentado de manera equivocada y, como indica Rand (1961), el capitalismo es “injustamente incomprendido”. Porque “siempre que el capital sea libre para fluir, tenderá a buscar aquellas áreas que ofrecen la tasa máxima de retorno” (p. 96).

Es necesario puntualizar que la esencia del mercado es la propiedad privada y la libertad de los propietarios de disponer, usar, gozar y defender sus bienes, con el fin de maximizar beneficios. Por tanto, la

gestión empresarial consiste en usar el mínimo de medios para satisfacer un máximo de fines, lo que requiere que los agentes económicos tengan ciertas virtudes de carácter, más que conocimientos científicos.

Entonces, para eso se necesita un ambiente sin condicionamientos ni trabas gubernamentales para que se pueda realizar la gestión empresarial eficaz y eficiente que busca obtener esos beneficios. La libertad lubrica el sistema de mercado e incentiva la gestión empresarial para satisfacer las peticiones de los consumidores que son los agentes primordiales de este proceso.

Por otro lado, la gestión burocrática procura involucrarse en los fines privados al aumentar la autoridad y la coacción a través de un texto de ley. Las personas se van acostumbrando a que deben implorar a una ley para que los proteja, o un reglamento de administración pública que los ampare en alcanzar sus necesidades. Así es como se reproduce la gestión burocrática, les hace pensar a los débiles de que estarán protegidos del más hábil y del más virtuoso y del más capaz. El incentivo perverso es no desear llegar a tener esas habilidades y virtudes, sino bajar al que está en una mejor condición.

Mises (2005) afirma que el ciudadano que quiere obtener el máximo beneficio (o por lo menos no perder), busca actuar en la gestión empresarial. En cambio “el interés primordial del burócrata radica en adaptarse a las normas y reglamentos sin que importe mucho que sean razonables o contrarios a lo proyectado. La virtud del burócrata consiste en cumplir con lo establecido” (p. 64).

La esfera burocrática en el manejo del aparato de gobierno se expande como

consecuencia ineludible de la sucesiva reducción de la libertad de los individuos, por cuanto el control del gobierno va sustituyendo poco a poco a la iniciativa privada. A lo que Mises manifiesta:

Lo que caracteriza a nuestra época es la expansión de la interferencia oficial en los negocios y en muchos otros aspectos de la vida de los ciudadanos. El resultado de ello es la sustitución de la organización basada en el beneficio por la organización burocrática (2005, p. 68).

Entonces, como principio de técnica administrativa y de organización, la burocracia no usa las normas y las reglamentaciones como preceptos para proteger a los individuos y garantizar sus derechos y libertad, sino que estas disposiciones están asignadas para cumplir con los deseos de la autoridad gubernamental. No tienen estos deseos ninguna relación con un margen de pérdidas o de ganancias porque resulta, tal y como afirmó Mises (2012):

Aún si concedemos [...] que cada individuo en una sociedad socialista se esforzará con el mismo celo que lo hace hoy [...], sigue existiendo el problema de medir el resultado de la actividad económica en una mancomunidad socialista que no permite ningún cálculo económico.

Por tanto, no hay posibilidad del cálculo económico por no haber precios de mercado y los resultados de esta gestión no pueden reflejar valores contables porque no producen nada y sus recursos son prácticamente ilimitados. No existe el incentivo que genera el principio del beneficio para el burócrata, por eso se limita al cumplimiento de normas y reglamentos. Es decir, su fin primordial se convierte en llenar los requisitos mínimos de trabajo diario, cumplir con los horarios establecidos y realizar los procedimientos

ya señalados. Por eso, la gestión burocrática resulta ser ineficiente e ineficaz.

La praxeología, como lo indica Mises reiteradamente, no provee un juicio de valor sobre la ética en sus planteamientos, más bien es una ciencia universalmente válida basada en la existencia y la comprensión de la acción humana deducidas desde su existencia como tal. Manifiesta Mises (2004) que “la vida y la realidad no son ni lógicas ni ilógicas; están simplemente dadas. Pero la lógica es el único instrumento con que cuenta el hombre para comprenderlas” (p. 81).

Entonces, lo que a la economía y a la praxeología les interesa, es lo que el hombre hace, en definitiva, no lo que debería hacer. No obstante, la praxeología ha determinado que el hombre actúa con fines personales y esa acción provoca cambios. En la medida que hay acción humana, no puede haber estabilidad, sino una variación permanente que causa desequilibrio. Cada vez que una persona actúa, desestabiliza la “normalidad” de la situación, la altera y realiza cambios sin que nadie se percate de ello, pero causa una coordinación espontánea que hace que todos sean de alguna manera favorecidos sin poder comprender a detalle cómo fue que sucedió aquello.

Como indica Rothbard (2004), “la praxeología aporta datos indispensables para hacer juicios éticos, pero puede ser extendida más allá de su esfera para criticar fines éticos” (p. 1297). Lo que propone Rothbard es que esa inconsistencia la hace conceptualmente imposible dentro de lo que es considerado inherente a la naturaleza humana o del universo. Si el fin se considera absurdo, entonces, también lo es cualquier enfoque para lograr ese fin. “En definitiva, estamos diciendo que los medios deben ser justificados por

el fin” (p. 1298).

Se vale recordar que uno de los axiomas de la praxeología es que los objetivos que el individuo procura alcanzar son ilimitados. Por ello debe tomar las decisiones realizando una jerarquía de preferencias para descartar o posponer las menos urgentes. Cada individuo elige de acuerdo con su escala de preferencias. Por otro lado, sucede que, una normativa que afecta la libertad del individuo de elegir la jerarquización y valoración de sus fines de acuerdo con los medios a su alcance crea la ficción jurídica que destruye la capacidad de otros para entrar a competir. De ahí que todos los agentes económicos son afectados y se favorece únicamente al monopolista privilegiado por la norma emanada de la autoridad. Así, Tocqueville afirma que

Todas las clases sociales se comprometieron por su causa; se combatió y se triunfó en su nombre; llegó a ser la ley entre las leyes ... Unas veces el pueblo en masa hace las leyes como en Atenas; otras los diputados elegidos por el voto universal lo representan y actúan en su nombre bajo su vigilancia casi inmediata. Hay países en donde un poder, en cierto modo ajeno al cuerpo social, obra sobre él y lo obliga a marchar en cierta dirección. En Estados Unidos la sociedad obra por sí misma y sobre sí misma, no existe poder sino dentro de su seno: nadie se atreve a concebir y a expresar la idea de buscar ese poder en otro lado (2015, p. 75).

Desde ese orden de ideas se facilita comprender que para que surja un orden social y las personas en una sociedad se beneficien como un todo, de modo automático se va desarrollando una especie de contrato social aceptado y conocido por todos. Para ello, se necesita que concurren diversos fines individuales en un ambiente de libre intercambio y colaboración. Esto sirve de incentivo para que las

personas se especialicen en un trabajo o en conocimientos, de modo que aumente la interacción entre ellos. Lo cual, como consecuencia, según indica Hayek (2014) “unido al crecimiento va el camino a la libertad individual”.

Es decir, nada está establecido de antemano, por el contrario, el camino se va trazando y coordinando mediante la consecución de los objetivos individuales, dando lugar a un complejo proceso de desarrollo de intercambios y de conductas que son imposibles de regular en su totalidad. Por tanto, mientras haya más libertad para dicha interacción social, las reglas surgen como un sistema emergente y abstracto, conocido, aceptado y aplicado por cada uno de los participantes.

Respecto de lo anterior, Johnson (2003) realizó un estudio que publicó en su obra *Sistemas emergentes*, estudio en el que concluyó sobre la espontaneidad y autonomía de sistemas como las comunidades de hormigas, el moho de fango, las neuronas del cerebro humano, la aparición de las ciudades y el avance de los sistemas de software. Esto parece tener una relación directa con el libre mercado, cuyo sistema podría considerarse como emergente. Y, con el fin de consultar y citar un autor imparcial en el tema económico, citamos algo que Johnson manifiesta:

Los bienes transmitidos en la ciudad encierran una valiosa información: los precios del mercado; dispositivos soñados por artesanos para reducir trabajo; nuevos remedios para las enfermedades. Las actividades afines se alojan juntas porque hay incentivos financieros para hacerlo y hacen posible que quienes ejercen esos oficios compartan técnicas y servicios a los que no necesariamente accederían por su cuenta. Esa formación de grupos gremiales se transforma en un ciclo que

tiende a perpetuarse: la información compartida hace más competitivos a los negocios agrupados que a los aislados (p. 96).

En otras palabras, la explicación teológica es que el fin de la conectividad libre es lograr la organización espontánea de los participantes. Esto hace que se comprenda la imposibilidad de lograr un equilibrio general mediante el positivismo jurídico impuesto por el legislador que pretende, a través de un conocimiento limitado y concentrado, moldear, moderar o alterar el curso de las acciones de los individuos. El problema de ello radica en que lo que se pretende resolver, únicamente los individuos saben con qué medios lo harán, en qué lugar y en qué tiempo. Es decir, cómo, cuándo y dónde. Información que el legislador ignora totalmente.

Respecto a Guatemala, en el año 2016 se presentó el *Proyecto de Ley de Competencia* ante el pleno del Congreso de la República. Según el compromiso adquirido con la Unión Europea en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, debió promulgarse la ley tres años después de su ratificación. Los gobernantes adquieren compromisos, hacen pactos que luego involucran a los ciudadanos y éstos son los últimos en conocer las condiciones que se convinieron. Los aspectos más relevantes de esta normativa se analizan a continuación.

En la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentran los preceptos relevantes en relación con la economía de mercado y la libre competencia. Específicamente, en el Artículo 130 constitucional está la prohibición de monopolios. Imponiendo la obligación al Estado de “limitar el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber la producción en un ramo indus-

trial o más”.

El fin del poder público es realizar el derecho y se le legitima cuando se ejerce conforme a derecho. El gobernante de turno, a través del legislador, está obligado por ese derecho a hacer cuanto pueda para asegurar el reino del derecho. Por lo que Jouvenel (1998) manifiesta:

La supremacía del derecho debe ser la gran idea central de toda ciencia política. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta idea supone y necesita la existencia de un derecho anterior al Estado y mentor de este. Pues, si el derecho es algo que el Poder elabora, ¿cómo podría jamás ser para él un obstáculo, una guía o un juez? (p. 398).

Eso permite reflexionar sobre cuál sería el derecho anterior y mentor del Estado que menciona de Jouvenel por cuanto, ¿cómo se justifica entonces que el gobierno pueda ejercer el derecho de monopolio cuando decreta, aplica y ejecuta la legislación que supone regular conductas, pero lo que logra es coartar y limitar la libertad individual? Es decir, a través de la promulgación de legislación, el gobernante puede arrogarse determinadas facultades que, a la vez que coartan la libertad individual, atentan contra la libertad de uso, goce, disposición y defensa de la propiedad privada.

Por ejemplo, la emisión de la moneda de curso legal que se acepta en toda transacción financiera dentro de un país es exclusiva facultad del gobierno y se convierte en obligación de los individuos dentro del territorio nacional aceptarla como tal. ¿No debe ser considerado un monopolio en las condiciones como las establece la Constitución? Se hace imprescindible volver a consultar lo que Jouvenel afirma:

La autoridad política debe ser justa, es decir obrar conforme a derecho. Pero el derecho, se nos dice, no es más que el conjunto de normas dictadas por esa autoridad. La autoridad que hace las leyes sería siempre, y por definición, justa. Puro sofisma Sólo la ley hace el derecho. Por consiguiente, todo lo que es ley es derecho, y no hay derecho contra la ley. De ahí que sea una ilusión buscar en el derecho un baluarte contra el Poder. Como dicen los juristas, el derecho es “positivo” (1998, p. 399).

Es evidente que lo que se decreta a través del poder legislativo como derecho, queda conceptualizado como derecho positivo y, a través de este se arroga potestades monopólicas sin que puedan ser señaladas de injustas o de innecesarias. En cambio, en el ámbito privado esas mismas potestades se prohíben. En los ciudadanos existe un grado de impotencia para cuestionar lo que procede de la autoridad como mandato, en virtud de que los que gobiernan no están sujetos a la legislación porque, a decir de Hobbes, la voluntad única de un representante sustituye la voluntad de todos: “... armado del derecho de representar a cada uno de los miembros de los estados, el Leviatán posee por ello poder y fuerza que puede dirigir las voluntades de todos gracias al terror que inspira” (Amurrio, p. 150).

Por otro lado, la experiencia de legislaciones en otros países señala que el descontento en materia de competencia y la mala apreciación de la política de competencia da lugar a que sea visualizada como un instrumento para erradicar los monopolios. A lo que Mises (2004) responde:

Las fuerzas que pretenden coartar la competencia desempeñan hoy un gran papel ... el problema de los monopolios

con el que la humanidad hoy se enfrenta no lo ha producido el funcionamiento del mercado, sino que es fruto de deliberadas actuaciones gubernamentales. Contrario a lo que proclama la demagogia, no es un vicio típico del capitalismo. En cambio, es la ineludible consecuencia de políticas hostiles al capitalismo que precisamente aspiran a sabotear y enervar su funcionamiento (p. 441).

No obstante, la prohibición de los monopolios es contrario a la libertad de comercio, de industria y de trabajo. Se considera que la prohibición de los monopolios limita y restringe la libertad de contratar ya que para prevenir determinados riesgos, se viola la autonomía para contratar. Por el contrario, cuando no se obstaculiza el proceso de mercado y este se torna competitivo, los controles pierden sentido.

Las grandes corporaciones no le pertenecen al gobierno, y por eso hay cierta creencia de que a los empresarios no les interesa la gente, pero, en realidad, entre más grande es una empresa, a más personas le debe su interés por funcionar bien. No se comprende que entre más grande es una empresa, “debe servir” a más gente. Aumenta el compromiso y la responsabilidad cuando se involucra a más personas en un proceso de producción o de participación como agente económico. Esto no lo considera el legislador al proponer una legislación con considerandos como estos.

En 2024 fue promulgada *Ley de Competencia*, Dto. 32-2024, cuyo objeto definido en el Artículo 1 indica: “Promover y defender la competencia para fortalecer la eficiencia económica en la búsqueda del bienestar de los consumidores nacionales. Así como prevenir, investigar, combatir, perseguir y sancionar las prácticas anticompetitivas y demás restriccio-

nes al funcionamiento eficiente de los mercados en beneficio de los consumidores nacionales”. La contradicción está en pretender “defender la competencia” cuando esta no necesita defensa alguna, más que la libertad de elegir que ejerce cada consumidor sobre lo que se le ofrece en el mercado.

Esta normativa pretende prevenir, investigar, combatir, perseguir y sancionar las prácticas anticompetitivas, las concentraciones irregulares y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en supuesto beneficio de los consumidores. No obstante, debe tomarse en cuenta que es difícil progresar sin libertad y debe resaltarse que, en un libre intercambio, las prácticas anticompetitivas se anulan unas a otras cuando el mismo consumidor tiene a su disposición un mayor número de productos para elegir. Por tanto, la riqueza de los productores contribuye a aumentar la riqueza de los consumidores, porque cada cual actúa proporcionando bienestar al otro a cambio.

Una de las prácticas consideradas anticompetitivas es el acaparamiento de la producción de determinado bien, no obstante, si el productor aprovecha sus ventajas comparativas, puede producir mayores cantidades de un bien que otros productores, de manera que no debe de considerarse una práctica anticompetitiva porque se desincentiva esa ventaja. Como manifiesta Hume: “Debe de subsistir la labiosidad y procurar reducir el estado de pereza e ignorancia que imperan cuando languidece el comercio, porque hace que cada uno caiga en el mismo estado de abyección al que se reduce a los demás” (2005, p. 188).

Algunas de las prácticas anticompetitivas que se definen en la mencionada *Ley de Competencia* como “acciones que res-

tringen la competencia en detrimento del bienestar de los consumidores”, por ejemplo son: la posición de dominio; la discriminación de precios; la negativa del trato; exclusividad. Consideramos que estas prácticas no debieran de criminalizarse, sino que podrían ser tratadas como un conflicto de orden civil, procurando encaminar la sanción hacia una compensación al daño causado o ya sea recurrir a la justicia restaurativa. Se debe hacer conciencia de que no es la dureza de la pena sino su efectiva aplicación para restituir las cosas a su estado anterior lo que se debe de procurar. Es decir, la afectación derivada de la pena impuesta no permite que las cosas vuelvan a su estado anterior.

El Artículo 2 de la ley contiene el ámbito de aplicación, que es de observancia general en toda la República y se aplicará a todos los agentes económicos. Esto afecta mayormente a las empresas locales que producen o importan sus productos del extranjero. Es una barrera y un desincentivo para empresas extranjeras, porque al haber obstáculos y condicionamientos, hace menos atractiva la inversión en territorio nacional. Por lo que podría haber un incentivo perverso de buscar evadir la norma o ver opciones de inversión en otras regiones donde se les permita entrar al mercado sin barreras que lo impidan.

Las instituciones públicas con las que cuenta el gobierno de Guatemala son numerosas. Entre más grande es un gobierno, más difícil se torna su gobernabilidad y más se rompe la armonía entre los ciudadanos en cuanto a interactuar en el mercado. Buchanan (1985) desarrolla su teoría de *Public Choice* que pone al descubierto que la acción humana de los políticos es como la de cualquier otro ser humano: actúa buscando el mayor beneficio posible para sí. Si estos pseudoempre-

sarios y el gobierno, a través de sus múltiples instituciones, continúan promulgando legislaciones sin límites, formando nuevas instituciones con el fin de controlar lo que los habitantes hagan dentro del margen de lo que ellos consideran ético, lo que hacen es desmotivar su creatividad.

Los intercambios en el mercado debieran tener como límite únicamente aquellas acciones que violen de alguna manera la libertad, la vida y la propiedad de terceros. En ese sentido, la libertad de contratación implica que ambas partes pactan de modo voluntario las condiciones, sin que haya que someterse a una condición o restricción que afectará el comportamiento de una, de ambas partes, o de terceros. Esto es lo que pretende la formación de una Superintendencia de Competencia y las sanciones que se imponen en la *Ley de Competencia* que se desea promulgar, quedando sujetos los participantes o agentes económicos a determinadas condiciones que no quedan del todo claras (Younkins, 2000).

Se percibe que la creación de una institución de control para resolver temas económicos pretende sustituir en buena parte la labor que cada día realizan los juzgados y las cortes. Aunque eso se considera que no es del todo negativo, en virtud que se permite desfogar en algún sentido el trabajo y la sobre explotación de los recursos judiciales. Bullard González (2006) aclara lo siguiente:

Es importante notar que es común que estas agencias no solo investigan los casos, sino que sustituyen al Poder Judicial y los resuelven directamente. Si bien sus decisiones son revisables en el fuero judicial, la verdad de la historia es que se crean diversos mecanismos para hacer difícil que estas decisiones sean revisables judicialmente. Estas agencias “antitrust”

cuentan con recursos y suelen ser parte del Poder Ejecutivo como controlador de los excesos de los políticos sobre la estructura de los mercados. Si bien los resultados a corto plazo parecen alentadores, en el largo y mediano plazo, estas agencias suelen sufrir presiones para ser capturadas tanto por los regulados (empresas) como por los políticos, con lo que la distinción entre lo público y lo privado termina por desvanecerse (p. 894).

Parece necesario desarrollar una cultura de competencia, en la que los entes participantes se autoeducan sobre comportamientos y actuaciones que pueden causar daño a otros competidores. El competidor dañado aprende cuando tiene que salir del juego y buscar otra área donde es probable que pueda lograr competir utilizando sus ventajas comparativas. No es necesario implementar nuevas normas jurídicas e instituciones públicas cuya aplicación pueden carecer de transparencia y eficiencia, lo que haría cuestionar su rigor técnico e institucionalidad con resultados opuestos a los esperados. Basta con permitir que los agentes económicos participen y ellos mismos se convenzan de sus capacidades y habilidades para competir.

No hay razón para pensar que aún con la idoneidad de las personas al frente de una nueva institución de control, encargados de decidir qué medidas aplicar, se garantice una eficaz y eficiente actuación. La razón es que suele haber diversidad de criterios para aplicar la norma, así como un catálogo de herramientas para su aplicación. Puede haber presiones internas del propio gobierno, así como resistencia externa de otros sectores económicos. El gran perdedor siempre será el consumidor que queda fuera de consideración en este juego.

Es necesario hacer énfasis en la rela-

ción entre las instituciones y la libertad comercial de los ciudadanos de un país. La calidad de las instituciones se interrelaciona fuertemente, según Spross (2020): “comparados con el conjunto del mundo, la mayoría de los países latinoamericanos tienen estados de pequeño tamaño, pero sistemas jurídicos politizados con frecuente favoritismo”. En el informe Spross indica lo siguiente:

Aunque el tamaño del gobierno es relativamente pequeño en nuestro país, ha crecido la cantidad de empleados públicos desde finales de la década de 1970. Ha aumentado el número de entidades de Gobierno encargadas de distintas funciones sociales; ante la ineficiencia de ciertas dependencias, se crean otras, como fue el caso de los fondos sociales, sin que necesariamente se cerraran las instancias ineficientes. Además, el clientelismo político ha cobrado su factura en un Gobierno con excesivo personal y costosas planillas, que absorben los presupuestos de los ministerios sin permitir la inversión en infraestructura o programas de servicios que debiera proveer el gobierno o que se esperaría lleguen a la población vulnerable y no llegan de forma efectiva.

Los empresarios no tienen más remedio que adaptarse a las condiciones institucionales bajo las cuales operan. Pero, en caso de existir o no determinadas tarifas, no puede ni favorecer ni perjudicar al empresario, porque cualesquiera que sean las circunstancias del mercado, tenderá a producir aquellos bienes de los que procurará recibir el máximo lucro además de verse obligado a agregar al precio final, el costo de las tarifas o gastos aplicados por las instituciones.

Ahora bien, los cambios o la creación de nuevas instituciones públicas pueden afectar de modo diferente a distintos sectores y empresas, a corto, mediano o a largo plazo (Mises, 2004, p. 97). Esto,

porque cada institución nueva que se crea por el gobierno repercute de modo distinto en cada sector productivo, porque se procura cambiar de modo centralizado las condiciones y el proceso de intercambio de bienes y servicios, es decir, afecta de forma artificial a la ley de la oferta y la demanda y repercute en otras leyes económicas porque responden a las condiciones y circunstancias de los procesos de mercado. De modo que es necesario comprender a la competencia, como plantea Hayek (2020) como “un ininterrumpido proceso de descubrimiento, presente en toda evolución, que lleva a responder inconscientemente a nuevas situaciones y que es la renovada competencia, lo que aumenta cada vez más nuestra eficacia” (p. 51).

Las instituciones públicas que se constituyen en cada nueva legislación crean y establecen una estructura organizacional politizada. Eso sucede en las instituciones de control cuando son integradas por elección directa que no garantiza la independencia de criterio de sus directivos o directores por el simple hecho de que los integrantes del directorio pertenecen a otros organismos estatales o gremiales. No debieran existir estas instituciones de control, por ser una “fatal arrogancia”, como dice Hayek (1988) pretender tener la información necesaria para controlar y centralizar un proceso que requiere de muchos datos que, en la realidad y de modo abstracto, se encuentran dispersos en el mercado. No obstante, de no ser posible su omisión, se opina que cualquier institución de control debería de ser formada con equipos multidisciplinarios ajenos a la estructura gubernamental, para asegurar su transparencia e imparcialidad.

Es de conocimiento general que los procedimientos engorrosos se entranpan,

se acumulan y evitan el funcionamiento adecuado de las empresas en “conflicto”. Entre más información se les exija a las empresas para ser sujetos de investigación, menos tiempo y oportunidad tendrán para participar de manera libre en el mercado. Estos procesos suelen entramparse y alargarse, ya que se veda el derecho constitucional e inherente al ser humano de contratar, comerciar y trabajar según cada cual elija y requiera para alcanzar sus propios fines.

Según Mises (2004) las instituciones políticas fundamentales del sistema liberal son “el gobierno por la mayoría; la tolerancia contra el disidente; la libertad de pensamiento, palabra y prensa; y, la igualdad de todos ante la ley” (p. 183). No obstante, no se comprende y procura tergiversar las ideas del liberalismo porque la intención es permitir la participación de un gobierno mayoritario, gestionando una multiplicidad de negocios públicos y poniéndole trabas a los negocios privados a través de la creación de más instituciones como las que se pretende en esta ley: Superintendencia de Competencia; Abogacía de Competencia, etc.

En síntesis, las razones que se dieron para aprobar la ley fueron: el mandato constitucional, el compromiso adquirido con la Unión Europea, el constante abuso de posición de dominio y de prácticas anticompetitivas que se dan en el mercado nacional, privilegiando a unos cuantos y poniéndoles limitantes a emprendedores que desean entrar a competir en el mercado.

Algunas de las prácticas que se considera que podrían ser sancionables para desincentivarlas serían el abuso de posición de dominio que implica la imposición de precios u otras condiciones comerciales no equitativas, que les cobra

más a algunos para que salgan del mercado y dejen de competir. En la mayoría de los casos, esta práctica se da porque alguna empresa grande domina el mercado y su fin es no permitir que otros puedan entrar a competir; no obstante, hay mecanismos para evadir esta práctica, como lo sería la innovación y mejora del producto ofrecido por esta empresa. También entra en esta categoría la negativa injustificada de ventas de ciertos productos o servicios, la aplicación de condiciones desiguales que otorgan ventajas a unos competidores frente a otros. Estas prácticas están penalizadas en las legislaciones vigentes en EE.UU., Alemania y Costa Rica para desincentivarlas.

En Costa Rica hubo un litigio de este tipo entre dos embotelladoras, en que la más grande suscribió contratos de exclusividad con sus clientes, quienes quedaban comprometidos a comprarle solamente a esa empresa. Este tipo de contratos en Guatemala son comunes, sobre todo en la comercialización de bebidas y alimentos procesados. En estos casos es necesario que haya una manera imparcial para dilucidar y proteger a los afectados que suelen ser los más pequeños empresarios que comienzan a buscar por dónde penetrar en la competencia. Si todos los competidores fueran conscientes, no sucedería, pero algunos, en la búsqueda de maximizar las utilidades ponen en situación de desventaja a los demás.

La libertad es el objetivo más elevado del pensamiento liberal. Aunque se debe aclarar: no todos los individuos anhelan la libertad puesto que, como se ha mencionado, cada persona abriga una diversidad de fines personales y una jerarquía muy particular de valores que contempla para tomar la decisión de actuar. Eso de por sí implica libertad. Pero, en general, el liberalismo tiene como fin primordial,

“limitar la coerción a la imposición de normas generales de mera conducta” (Hayek, 2007, p. 176).

Cualquier cosa, asunto o elemento que pretenda impedir que el consumidor ejerza libremente su soberana voluntad, implica anular toda libertad y lo deja en una posición sin otra alternativa más que obedecer. Ya no le queda la opción de cumplir sus juicios personales de valoración porque por medio de la legislación, con la apariencia de *proteger al consumidor*, se le limita la posibilidad de elegir. Mises (2005) agrega que “toda injerencia del Estado en la actividad de la empresa privada produce desastrosas consecuencias. Paraliza la iniciativa y engendra la burocracia” (p. 97).

Aparte, se percibe con claridad que la ambigüedad de la legislación esconde un importante asunto: limitar la libertad del agente económico de complacer o de atraer hacia él, los gustos del consumidor. Por ejemplo: no se puede tener una opinión absoluta que indique la definición precisa sobre lo que significan los términos “ganancias excesivas”, por lo que ese simple concepto da lugar a interpretaciones subjetivas que, usadas de manera arbitraria, pueden generar conflictos verdaderos, porque, ¿existe algún parámetro disponible para distinguir la ganancia legítima de la excesiva que no sea por los juicios de valor personales? Se puede afirmar que hay legalidad, pero no hay legitimidad.

Es imprescindible en este punto hacer énfasis en que una de las principales explicaciones del por qué no se acepta la acumulación de bienes y riqueza, como afirma Rojas (2022), “se basa en el error de pensar que la prosperidad de algunos se produce necesariamente a expensas de la propiedad de otros” (p. 109), como si

fuera un juego de azar de suma cero. En este tipo de juegos, no es posible generar una ganancia sin afectar al resto. Es decir, en un juego de azar como los naipes, lo que ha ganado un competidor procede directamente de lo que otro ha perdido. Las ganancias no salen de algo que es fruto de la producción, sino de lo que cada jugador ofrece y aporta, en la medida en que está seguro de ganar. Cada cual arriesga lo que ofrece, con tal de ganarlo todo, pero puede que otro tenga mejores cartas. Por esa razón, el ganador se lleva todo y los demás lo pierden todo.

Por el contrario, en la competencia del libre mercado cuando cada agente económico participa en el intercambio, procura generar la máxima ganancia posible pero no lo hace quitándole a los demás lo que tienen, sino *cooperando* en el sentido de que cada uno da de lo que tiene, lo *intercambia* por lo que *voluntariamente* pacta con otros. De modo que cada uno se lleva lo que le corresponde a cambio. Cada uno debe ganarse el favor o el voto de los clientes o consumidores. Y éstos, a través de sus valoraciones personales ordenadas jerárquicamente, emiten su voto a través de sus preferencias inmediatas.

Lamentablemente, cuando existe una idea equivocada sobre lo que significa competir en el mercado intercambiando todo tipo de bienes y servicios con el fin de maximizar las utilidades, se duda de la eficacia y espontaneidad del proceso. Esa idea equivocada sobre la manera cómo funciona el libre mercado hace que se procure con toda la fuerza de la legislación intervenir para “proteger” a los que están seguros de no poder alcanzar lo que se requiere para competir. De modo que se quiere aparentar como si se promoviera una mayor “igualdad” de condiciones. Esa deseada “igualdad” únicamente se

puede lograr cuando se le ponen más obstáculos al competidor que va en la delantera, cuyas ventajas comparativas son evidentes.

Las bases de los axiomas praxeológicos consisten en proteger, defender y reivindicar la trilogía de los derechos individuales: derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Haciendo uso de la lógica se puede comprender que el liberalismo, como corriente de pensamiento económico resulta más beneficioso para un mayor número de personas, por las siguientes razones: 1) procura que cada persona se realice trabajando en lo que desea; 2) dándole libertad de hacer uso de sus escasos medios; 3) necesariamente se le da libertad de ejercer su derecho de propiedad privada: usándola, gozándola y disponiendo de ella a su antojo; 4) para lograr alcanzar las metas que se ha propuesto con el fin de alcanzar la calidad de vida que anhela.

El *Diccionario Panhispánico del Español Jurídico* define el derecho de la competencia como “el sector del ordenamiento jurídico que regula la actividad competitiva de todos cuantos operan en el mercado ofreciendo profesionalmente bienes o servicios”. Partiendo de esta definición, se entiende que regular la actividad competitiva de todos, implica que se tenga que prohibir y permitir determinadas conductas de producción de bienes y servicios que lleven a cabo los agentes económicos para competir en el mercado. Esta definición no especifica que el propósito del agente económico que ofrece productos o bienes en el mercado sea restringir la competencia o dañar a otros competidores. Por esa razón se tendrá que recurrir a la historia y a la doctrina para determinar el desarrollo de este Derecho de Competencia y su aplicación. No sin antes puntualizar lo que dice Rand

(1961):

...el término competencia es un sustantivo activo, no pasivo que se aplica a toda actividad económica, no solamente a la producción, sino también al comercio; implica la necesidad de tomar acciones para incidir sobre las condiciones del mercado en beneficio propio (p. 86).

El derecho de competencia o *antitrust* se originó en los Estados Unidos de América y fue creado para combatir los *trust* del comercio. El *trust* es una asociación de empresas que, dentro de un mismo gremio, establecen acuerdos de propiedad, fijación de precios y no competencia entre los asociados. El objetivo es formar un monopolio de mercado (Coll Morales, 2020). Este tipo de *trusts* surgen en Estados Unidos durante el siglo XIX, tras la guerra de secesión, siendo la Standard Oil Trust la primera empresa que adoptó este tipo de asociación. Por lo que, en 1890 se promulgó la *Sherman Act* que declaró la ilegalidad de los *trusts* en el país.

Posteriormente, más de cien países adoptaron el *antitrust* en su ordenamiento jurídico, utilizando términos como *leyes de competencia* o *antimonopolios*. Actualmente la mayoría de los países industrializados y algunos países en desarrollo han promulgado leyes de competencia. Los asuntos antimonopolio que se tratan en esta medida política se aplican en sentido amplio a la mayoría de las leyes antimonopolio y aquellas relacionadas con la competencia en todo el mundo.

El objetivo de los *trust* dentro de una misma industria es que los miembros asociados obtengan un mayor poder de mercado mediante monopolios suponiendo que de ese modo no se ajustan a las leyes de la libre competencia y eso es lo que pretende regular el Derecho de Competencia. La intención es bloquear su

entrada en el mercado así como evitar los supuestos efectos negativos que se pueden generar en el proceso de mercado.

No obstante, la mayoría de los economistas y abogados consideran que el Derecho de Competencia busca promover la competencia justa entre las empresas, basados en la premisa del comercio libre que beneficia a los consumidores, a las empresas y a la economía en general, prohibiendo diversos tipos de restricciones comerciales como el abuso de la monopolización. Se dice que procura el fomento de la calidad de los bienes y servicios al menor precio posible, garantizando una estructura de mercado eficiente y evitar que las empresas abusen en la posición del mercado de modo que limite la competencia (Kelly, 2022).

El tema de la competencia en el mercado en la actualidad recibe cada vez más interés de parte de las personas en todo el mundo. De hecho, no es un tema nuevo sino desde el siglo XVI, según refiere Fernández Delgado (2006), los teólogos de la Escuela de Salamanca estudiaron la relación entre el precio justo y la oferta y la demanda, formulando la teoría del valor subjetivo concluyendo que el precio justo es el precio del mercado, sentando así las bases de la economía moderna.

Para comprender algunos de los fenómenos complejos que se gestan en las sociedades, se debe de acentuar que el mercado es lo opuesto al intervencionismo porque es la ausencia de un “modelo”. Y es por lo que se ataca a la economía de mercado como de “anárquica, desordenada, impredecible, injusta, proclive a generar abusos, que degenera la moral de la sociedad hacia el materialismo” (Mises, 2019, p. 8).

Por tanto, la falta de comprensión de los temas de libre mercado puede condu-

cir a una problemática profunda que incluso puede terminar en un ciclo interminable de intervencionismos acallando el clamor por la libertad individual. Al respecto, Rothbard (2015) manifiesta que una las funciones del economista en el libre mercado es explicar la manera cómo funciona la economía de mercado, porque “las personas sin formación tienden a considerarla un completo caos” (p. 308).

Al respecto, Younkins (2000) asegura que la competencia simplemente se refiere a una situación en la que se siguen las reglas básicas de una sociedad libre: “libertad de contratación, propiedad privada, etc. La esencia de un mercado libre no es la competencia pura y perfecta, sino la libertad de competencia”. Por lo que, partiendo desde el pensamiento liberal que indica que la convivencia pacífica es la nota esencial de la vida en sociedad, se comprende que el punto de partida para el progreso de una sociedad es la libertad del individuo para elegir los medios que utilizará para alcanzar sus fines.

De modo que, si se concibe a las relaciones sociales como interacciones de individuo a individuo, se deduce que, como resalta Recaséns Siches (1991), “el hombre es el punto de partida, el centro, el agente y el objeto de todas las llamadas actividades sociales. En efecto, los hechos sociales del hombre salen y a él van a parar”. El mismo jurista y filósofo del derecho explica que, cuando se comprende que la sociedad no es una realidad sustantiva, sino que es una serie de acciones de los individuos que la conforman y sus interacciones entre ellos, se puede concebir que lo único real que tiene sustancia es el individuo (p. 109). Y también se intuye que, dado que la vida de cada individuo se vive en sociedad interactuando con otros y aprovechando lo que otros han hecho antes que él, cada acción

del individuo en su entorno le agrega algo a la esencia del otro, siendo esto lo que lo impulsa a tomar decisiones y, por ende, a actuar de determinada forma. Es la misma razón por la que el liberalismo defiende la postura de que cada acción humana afecta y cambia el entorno sin darse cuenta. El dinamismo de la sociedad, del mercado, de las relaciones está circunscrito a las acciones de sus miembros y participantes que actúan buscando sus fines.

Asimismo, Mises (2004) destaca la importancia de los precios como indicadores de los juicios de valor del consumidor, señalando que en un mercado ideal, los precios reflejan inmediatamente los cambios en las circunstancias. Esta dinámica implica que los empresarios compiten y cooperan simultáneamente, contribuyendo – sin saberlo – al equilibrio del mercado. Mises argumenta que, aunque algunos pierden en la competencia, estos no son eliminados sino relegados a roles más adecuados a sus habilidades. El comercio libre es un intercambio voluntario sin restricciones, lo cual se opone al proteccionismo. Las leyes antimonopolios pretenden asegurar este comercio, aunque Mises advierte que la intervención estatal puede obstaculizar la eficiencia del libre mercado. Las restricciones comerciales son vistas como impedimentos artificiales que limitan la elección del consumidor y la creatividad empresarial, lo que a su vez reduce la producción y genera pobreza.

Respecto al monopolio, no es necesariamente contrario a la competencia, ya que los monopolios pueden ser superados a través de la innovación y la libre competencia. Kirzner (1998) sostiene que la competencia es un proceso dinámico e imperfecto en el que la libertad de acceso al mercado es fundamental. Mises (2011) también argumenta que las leyes antimonopolio pueden ser perjudiciales, pues los

monopolios tienden a desintegrarse naturalmente debido a la competencia. Por lo tanto, la intervención gubernamental puede resultar innecesaria y dañina, aumentando los precios y reduciendo la innovación.

DISCUSIÓN

El análisis praxeológico de las leyes de competencia evidenció que la intervención estatal en los mercados puede llevar a consecuencias no previstas, alterando las dinámicas naturales de la oferta y la demanda. Desde esta perspectiva, las regulaciones, aunque diseñadas para proteger al consumidor y evitar prácticas monopolísticas, pueden generar distorsiones que afectan la eficiencia económica y limitan la libertad de los agentes económicos. Ludwig von Mises y Friedrich Hayek argumentaron que las políticas intervencionistas tienden a obstaculizar el proceso de descubrimiento propio del mercado, el cual depende de la acción voluntaria y la interacción entre individuos.

Las regulaciones de competencia suelen partir de la premisa de que el mercado, si se deja sin supervisión, puede conducir a concentraciones de poder económico que dañan a los consumidores y a la economía en general. Sin embargo, esta visión no siempre considera que los monopolios y las posiciones de dominio pueden surgir como resultado de ventajas competitivas naturales y la eficiencia empresarial. Los esfuerzos por limitar estas posiciones a través de la intervención estatal pueden, en algunos casos, restringir la innovación y reducir el incentivo para mejorar la calidad y reducir los precios.

Otro aspecto que surgió en el análisis es la tendencia de las legislaciones de

competencia a crear estructuras burocráticas que intentan regular los mercados. Estas estructuras, en su afán de controlar y supervisar la actividad económica, pueden introducir rigideces que dificultan la adaptación y el dinamismo del mercado. La burocracia tiende a enfocarse en el cumplimiento de normas específicas, lo que puede llevar a sobre-regulación y a la creación de barreras para la entrada de nuevos competidores, para limitar así la competencia que se pretende proteger.

Se observó que las leyes de competencia pueden generar un entorno de incertidumbre jurídica para los agentes económicos. La ambigüedad en la definición de prácticas anticompetitivas, como la discriminación de precios o la posición dominante, puede llevar a interpretaciones subjetivas y a una aplicación arbitraria de las normas. Esta incertidumbre afecta la toma de decisiones empresariales, ya que los agentes pueden verse desincentivados a expandir sus operaciones o a innovar por temor a infringir la normativa. En consecuencia, las regulaciones pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo económico y el progreso social.

Además, la intervención legislativa puede contradecir los principios del libre mercado al intentar imponer un orden que no surge de la interacción voluntaria entre los individuos. El mercado libre se basa en la idea de que cada agente económico actúa de acuerdo con sus propios intereses, y a través de este proceso de acción y reacción se alcanza un equilibrio que refleja las preferencias y necesidades de los consumidores. La imposición de reglas externas, por tanto, puede distorsionar este proceso y conducir a resultados subóptimos que no benefician ni a los consumidores ni a la economía en general.

CONCLUSIONES

Las conclusiones del análisis praxeológico de las leyes de competencia resaltan que la intervención estatal, aunque motivada por la intención de proteger a los consumidores y garantizar la equidad en el mercado, puede generar efectos contraproducentes. Las regulaciones pueden distorsionar las dinámicas naturales de la oferta y la demanda y así limitar la eficiencia económica y restringir la libertad de los agentes. La burocracia resultante de estas intervenciones tiende a introducir rigideces en el mercado, lo que dificulta la adaptación y el proceso de descubrimiento que caracteriza a un entorno competitivo y dinámico.

Se evidenció que las regulaciones de competencia pueden generar incertidumbre jurídica, al aplicar conceptos ambiguos como la discriminación de precios o la posición dominante. Esta falta de claridad puede llevar a interpretaciones subjetivas y a una aplicación arbitraria de la normativa, lo que afecta la toma de decisiones de los empresarios. En lugar de fomentar la innovación y el crecimiento, las leyes de competencia, en su forma actual, pueden actuar como barreras para el desarrollo y la entrada de nuevos competidores al mercado.

El análisis también subraya la importancia de comprender las leyes económicas naturales y el papel de la acción voluntaria en la creación de valor y en la resolución de conflictos sociales. El mercado libre, al permitir que los individuos interactúen y cooperen según sus propios intereses y motivaciones, puede conducir a un orden espontáneo que refleja las preferencias y necesidades de los consumidores. La intervención estatal, por tanto, debe ser cautelosa y considerar las implicaciones a largo plazo en la eficien-

cia del mercado y la libertad individual.

En definitiva, se puede afirmar que las leyes de competencia deben ser revisadas y aplicadas con moderación, teniendo en cuenta el equilibrio entre la protección del consumidor y la promoción de un entorno que favorezca la innovación y el crecimiento económico. En lugar de imponer restricciones que puedan limitar la capacidad de los individuos para actuar y competir, es necesario fomentar un marco legal que permita la libertad de acción y la autorregulación del mercado, confiando en las dinámicas espontáneas que surgen de la interacción entre agentes económicos.

REFERENCIAS

- Amurrio, J. (2009). *Clásicos del pensamiento político*. Guatemala: UFM.
- Buchanan, J. M. (1985). *The Reason of Rules*. New York: Cambridge University Press.
- Bullard González, A. (2006). *Derecho y economía: El análisis económico de las instituciones legales*. Lima: Palestra Editores.
- Cole, J. H. (2004). *La metodología del análisis económico*. Madrid: Unión Editorial.
- Coll Morales, F. (2020). *Trust*. Economipedia.com: <https://economipedia.com/definiciones/trust.html> (11 de marzo).
- Fernández Delgado, R. (2006). *Liberalismo y estatismo en el siglo de oro español*. Madrid: Unión Editorial.
- Hayek, F. A. (2001). *Principios de un orden social liberal*. Madrid: Unión Editorial.
- . (2006). *Derecho, legislación y libertad*. Madrid: Unión Editorial.

-
- . (2007). *Nuevos estudios de filosofía, política, economía e historia de las ideas*. Madrid: Unión Editorial.
- . (2014). *Los fundamentos de la libertad*. Madrid: Unión Editorial
- . (2020). *La fatal arrogancia*. Madrid: Unión Editorial.
- Hume, D. (2005). *Ensayos políticos*. Madrid: Unión Editorial.
- Johnson, S. (2003). *Sistemas emergentes*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Jouvenel, B. de (1998). *Sobre el poder*. Madrid: Unión Editorial.
- Keckeissen, J. E. (2014). *¿Qué significan las leyes económicas?* Guatemala: UFM.
- Kelly, R. C. (2022). *What is Antitrust?* Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/a/antitrust.asp> (8 de junio).
- Kirzner, I. M. (1998). *Competencia y empresarialidad*. Madrid: Unión Editorial.
- Mises, L. von (2004). *La acción humana. Tratado de economía*. Madrid: Unión Editorial.
- . (2005). *Burocracia*. Madrid: Unión Editorial.
- . (2007). *Política económica*. Madrid: Unión Editorial.
- . (2011). *Liberalismo, la tradición clásica*. Madrid: Unión Editorial.
- . (2019). *El mercado*. Guatemala: UFM.
- . (2012). *Planificación para la libertad*. Madrid: Unión Editorial.
- . (2012). *Economic Calculation in the Socialist Commonwealth*. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.
- Rand, A. (1961). *Capitalismo, el ideal desconocido*. Buenos Aires: Grito Sagrado Editorial.
- Recaséns Siches, L. (1991). *Tratado general de sociología*. México: Editorial Porrúa.
- Rojas, R. M. (2018). *Fundamentos praxeológicos del derecho*. Madrid: Unión Editorial.
- . (2022). *La propiedad*. Madrid: Unión Editorial.
- Rothbard, M. (2004). *Man, Economy and State with Power and Market*. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.
- . (2015). *Poder y mercado. El gobierno y la economía*. Madrid: Unión Editorial.
- Tocqueville, A. de (2015). *La democracia en América*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Smith, A. (2007). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. New York: MetaLibri.
- Spross, V. (2020). *Guatemala y la libertad económica*. CIEN (Guatemala): <https://ci en.org.gt/index.php/guatemala-y-la-libertad-economica/> (13 de febrero).
- Younkins, E. W. (2000). "Antitrust Laws Should be Abolished," *Le Québécois Libre*, No. 56 (19 de febrero).
-